

«Oro y agua»: dilemas y giros políticos de Ollanta Humala

ÓSCAR MURILLO RAMÍREZ

En julio de 2011, tras una apretada victoria en las urnas contra Keiko Fujimori, Ollanta Humala juró la Presidencia del Perú sobre la Constitución de 1979, rechazando la vigente desde 1993, redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Humala prometió articular un alto crecimiento económico con políticas de inclusión social y conciliar el desarrollo con el respeto a la naturaleza, en medio de crecientes conflictos socioambientales. Pese a los buenos resultados de los primeros meses, en las encuestas se registra una tendencia descendente en la aprobación a la gestión presidencial, y parte de la izquierda que apoyó a Humala durante la campaña se ha alejado y ha denunciado el giro conservador del gobierno hacia un régimen que privilegia orden e inversiones.

El 24 de noviembre de 2011 se inició en Cajamarca, región noroeste de Perú, una huelga por tiempo indefinido contra la puesta en marcha del proyecto de Minas Conga, en manos de Yanacocha, la filial peruana de la transnacional estadounidense Newmont. El proyecto minero fue aprobado durante el gobierno de Alan

García (2006-2011) y, según lo previsto en 2010, implicaría una inversión de por lo menos us\$ 3.000 millones para acceder a reservas calculadas en 11,8 millones de onzas de oro y 3.200 millones de libras de cobre¹. El resultado del proyecto redundaría –según la empresa– en un canon para la región de us\$ 1.150 millones.

Oscar Murillo Ramírez: es historiador por la Universidad Nacional de Colombia. Maestrante en Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso-Ecuador. Es autor, junto con Medófilo Medina, de *Colombia. País humano, país plural* (Corporación Editora Nacional, Quito, en prensa). Es analista de la sección internacional de la revista *Razón Pública*.

Palabras claves: extractivismo, crecimiento económico, inclusión social, Ollanta Humala, Perú.
1. «Newmont planea invertir us\$ 3.000 millones en proyecto Minas Conga en Cajamarca» en *El Comercio*, 18/5/2010.

El gobierno de Ollanta Humala defiende el proyecto bajo las premisas del compromiso social de la minería, la concertación con las comunidades, la generación de desarrollo para la región –particularmente empleo– y la protección de los recursos naturales que harían posible la coexistencia de «agua y oro». Por su parte, las organizaciones sociales de Cajamarca, entre las cuales se encuentra el Frente de Defensa Ambiental, cuestionan el proyecto Conga por el alto costo ambiental ya que, según el líder Wilfredo Saavedra, la explotación «destruye el colchón acuífero y eso es irreversible, de dónde sacaremos agua. Se van a destruir seis lagunas y no se puede decir que se trasvasarán cuatro a reservorios y dos se convertirán en basureros por 19 años»².

El crecimiento económico peruano está basado en un modelo minero-exportador. Y del total de las exportaciones, 60% proviene del renglón minero de la economía. El oro es el principal producto de exportación en el primer trimestre de 2012³. Perú ocupa el sexto lugar entre los países exportadores de oro del mundo y ha contado con un escenario internacional que favoreció el aumento del precio de este metal. Del oro que se exporta, 37,5% proviene de Cajamarca, lo cual ha convertido esta región en uno de los principales polos mineros del país, junto con Moquegua. Adicionalmente, 80% de la inversión que

se realiza en el país corresponde a capital privado extranjero.

El conflicto no es de fácil resolución. Humala tiene el reto de materializar la inclusión social prometida durante la campaña y mantener el crecimiento económico que la haga posible, un dilema que enfrenta a su electorado contra las bases materiales del crecimiento de los últimos años. La fuente del poder político de Humala se encuentra en las regiones más conflictivas, particularmente en las zonas de la sierra y Amazonia, donde fue indiscutible ganador en las pasadas elecciones. Tiene ante sí a la población a la cual le prometió el cambio. Perú tiene 30% de su población bajo la línea de pobreza y, de ese porcentaje, 70% es población rural ubicada en las zonas de conflicto social. Pero «oro» y «agua» aparecen como opciones excluyentes para las poblaciones afectadas por la gran minería.

Además de la presión que ejercen sus propios electores, Humala enfrenta a una oposición que toma bríos ante cualquier conflicto social e invoca la mano dura, un empresariado que, aunque respalda en un 63% la gestión,

2. «Wilfredo Saavedra: 'Apostamos por el triunfo electoral de Ollanta Humala'» en *El Comercio*, 7/12/2011.

3. «Oro se convirtió en principal producto de exportación en primer trimestre» en *El Comercio*, 7/5/2012. Según la Sociedad Nacional de Minería, los envíos de este metal precioso sumaron us\$ 2.570 millones, 23% del total de las exportaciones peruanas en ese periodo.

cuestiona el tratamiento que se da a los conflictos sociales y un equilibrio que se puede romper en cualquier momento en el seno de la coalición oficial.

A todo esto se sumaron los recientes ataques de Sendero Luminoso en los valles del río Apurímac y Eme, que en abril pasado puso en jaque al gobierno al tomar a 36 trabajadores petroleros como rehenes, además de efectuar ataques a las fuerzas de seguridad cuyo saldo fueron varios policías y militares muertos.

La ex-candidata presidencial Keiko Fujimori, por ejemplo, señaló que las protestas de Cajamarca eran un síntoma de la falta de autoridad y una consecuencia del discurso radical que Humala usó en la campaña presidencial⁴. También hubo cuestionamientos desde el propio oficialismo, como el hecho por el entonces ministro de Ambiente Ricardo Giesecke, quien opinó que el daño ambiental en la región sería irreversible⁵, además de la renuncia presentada por el viceministro de Gestión Ambiental José Echave, quien sostuvo que no existía una estrategia real para enfrentar las protestas. Según la Defensoría del Pueblo, fueron 14 los muertos entre agosto de 2011 y abril de 2012 en diversos conflictos sociales.

Por su parte, los congresistas del ala izquierda del gobierno Javier Diez Canseco y Rosa Mavila acusaron a

Humala de «haber faltado a su palabra y los compromisos contraídos con el país» en su carta de renuncia a la bancada de Gana Perú, dirigida al presidente. Para los legisladores, los «derrotados en las elecciones pasaron a coger y a imponer sus criterios autoritarios y de subordinación a los grandes grupos de poder económico, en espacios decisivos, contradiciendo lo prometido al país»⁶.

■ Entre la mano dura y un movimiento social sin cohesión

En medio de estas críticas, Humala nombró ministro del Interior al general retirado Wilber Calle. Este y el actual primer ministro, el teniente coronel retirado Oscar Valdés Dancuart, son los dos militares que forman parte del gabinete que fue renovado casi en un 50% en diciembre de 2011 a causa de las protestas sociales. Este cambio inspiró un sugestivo titular a toda portada en el diario *La Primera*: «Gabinete se inclina a la derecha. Orden e inversiones».

De hecho, el propio primer mandatario proviene de las filas militares y estuvo vinculado –junto con su hermano Antauro Humala, hoy preso

4. «Keiko Fujimori afirma que protestas en Cajamarca nos muestran a un Humala débil» en *Correo*, 3/12/2011.

5. «Ricardo Giesecke: 'No soy antiminerero, pero me opongo al abuso'» en *El Comercio*, 4/3/2012.

6. *El Comercio*, 4/6/2012, <<http://elcomercio.pe/politica/1423880/noticia-lea-dura-carta-renuncia-javier-diez-canseco-rosa-mavila>>.

por el ataque a la comisaría de Andahuaylas en 2005– al llamado Movimiento Etnocacerista. No obstante, en los últimos años Humala se deshizo de la imagen de nacionalista radical y antichileno, cercano a Hugo Chávez, y giró hacia un perfil «lulista», gracias al asesoramiento de publicistas vinculados al Partido de los Trabajadores (PT) brasileño.

Aunque el 1 de diciembre de 2011 el gobierno de Humala suspendió temporalmente el proyecto de Minas Conga, esto no facilitó la construcción de acuerdos con las comunidades. Ante ello, la respuesta oficial fue declarar, a partir del 6 de diciembre de ese año, el estado de emergencia que regiría por un plazo de 60 días. Con esta medida se reafirmó el «principio de autoridad», pero se perdió la capacidad de construir consenso.

La gestión política frente a las protestas ha incluido violentas represiones contra los manifestantes, lo que ha puesto en duda el respaldo de la bancada de Perú Posible, el partido del ex-presidente Alejandro Toledo, un aliado importante del gobierno. Justamente, y a raíz de las protestas en Cajamarca, el 10 de diciembre renunció a la presidencia del Consejo de Ministros Salomón Lerner Ghitis, algo que fue visto como un principio de crisis.

La confrontación social ha incluido a diversos actores. El pasado 29 de diciembre, los empresarios locales que

se beneficiarán con el proyecto Conga movilizaron maquinaria hasta la sede del gobierno regional para exigir soluciones. Cuatro días después, se reanudaron las protestas antimineras encabezadas por Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, quien se vio envuelto en enconadas disputas con el poder nacional que incluyeron una ordenanza que declaró inviable el proyecto Conga⁷. En respuesta, monseñor Luis Bamba-rén, ex-presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, indicó que no se puede perder la posibilidad de desarrollo para Cajamarca por «dos o tres agitadores», en clara alusión a Santos y Marco Arana, este último líder del movimiento Tierra y Libertad⁸.

El gobierno, junto con varias autoridades municipales de la región, acordó el 27 de diciembre de 2011 la realización de un peritaje internacional sobre el proyecto Conga, cuyo informe fue presentado el pasado 17 de abril. El trabajo, considerado un informe técnico y no una determinación sobre la viabilidad del proyecto, señaló entre sus recomendaciones la necesidad de constituir una veeduría y un comité de acompañamiento en

7. Adicionalmente, a raíz de las movilizaciones reanudadas el 2 de enero en Cajamarca, varios sectores sociales convocaron a una movilización nacional en defensa del agua para el 27 de enero.

8. «Bambarén exhortó a Santos a 'demostrar madurez' y retomar el diálogo por Conga» en *El Comercio*, 23/4/2012.

la ejecución del proyecto, la protección de las lagunas Azul y Chica, y la creación de una cátedra de Hidrología Minera y Ambiental en las universidades regionales financiada por las empresas mineras de la región⁹.

Luego del informe, el presidente Humala se reunió con los líderes de las bancadas del Congreso y les pidió su apoyo para ganar gobernabilidad. Además, emitió un mensaje a toda la nación en el que se refirió al informe pericial sobre el proyecto Conga y señaló que su gobierno está comprometido con la generación de crecimiento con oportunidades para la reducción de la pobreza, y la necesidad de generar canales de entendimiento en los marcos del Estado de derecho que privilegien el interés colectivo sin aceptar la soberbia de ninguna empresa. Sostuvo también que el acceso al agua será una política de Estado y señaló como metas para 2016 60% de cobertura para el área rural y 95% para el área urbana¹⁰.

Un día antes del pronunciamiento de Humala, a través de los medios de comunicación se conoció la división en el seno del Frente Anti-Conga entre dos bandos: el primero está encabezado por Wilfredo Saavedra, líder del Frente de Defensa Ambiental –a menudo acusado de radicalismo– y ex-miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); el segundo está liderado por los mencionados Gregorio Santos y Marco Arana, a quienes

sus detractores acusan de tener intereses electorales para las presidenciales de 2016.

El conflicto aún no tiene una completa definición, ya que persiste la disputa entre el poder local y el nacional. El pasado 17 de abril, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ordenanza contra Conga dictada por el presidente de Cajamarca, quien reconoció que su oposición es de tipo político, y el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Dancuart, señaló que en Cajamarca hay agua suficiente pero no está asegurado el acceso a ella¹¹.

Lo que se vislumbra por ahora es que las divisiones internas han reducido la capacidad organizativa del movimiento social antiminerero al ámbito local. Hasta el momento este logró resultados escasos a escala nacional, lo que limita la materialización de sus reivindicaciones. El desgaste de los últimos meses parece haber favorecido al gobierno, que ha planteado la posibilidad de reanudar la realización del proyecto Conga. Sin embargo, los hechos han dejado en evidencia los

9. Rafael Fernández Rubio, Luis López García y José Martins Carvalho: *Dictamen pericial internacional. Componente hídrico del estudio del impacto ambiental del proyecto minero Conga (Cajamarca-Perú)*, Presidencia del Consejo de Ministros, Lima, 2012, p. 9.

10. Presidencia de la República del Perú, Secretaría de Prensa, 20 de abril de 2012.

11. «Valdés sobre Conga: ‘Cajamarca entenderá que sobra agua, lo que falta es acceso’» en *El Comercio*, 23/4/2012.

Cuadro 1

Perú: tasa de variación anual del PIB, 2000-2010 (en porcentaje)

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
3,0	0,2	5,0	4,0	5,0	6,8	7,7	8,9	9,8	0,9	8,8

Fuente: elaboración del autor a partir de datos de Cepalstat, <www.eclac.org/estadisticas/>.

límites del modelo minero exportador y aún falta saber si será posible concretar la anhelada inclusión social. A ello se han sumado los cuestionamientos de las organizaciones de Cajamarca que denuncian que no se generarán los empleos previstos. La ecuación es muy sencilla: los renglones de la economía que son intensivos en capital no son generadores de empleo masivo.

■ El Perú que recibió Humala: alto crecimiento, baja inclusión social

Desde antes de finalizar la segunda vuelta presidencial, Perú vivía momentos de tensión social debido a la expansión de las protestas sociales. En Puno, al sur del país, se inició en abril de 2011 una protesta de las comunidades campesinas reunidas en el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur, que exigió que la región se declarara zona de exclusión para la actividad minera.

La tensión social producida por la minería ha sido el foco de la conflictividad social en el Perú de los últimos años, aunada con una serie de factores como la ausencia de un siste-

ma de partidos sólido y la debilidad de los actores políticos y del Estado, además de la falta de legitimidad del sistema político¹². Sin duda, la endeble articulación entre el crecimiento económico y el desarrollo social es uno de los factores centrales de la creciente movilización social. El modelo económico de la última década, por su parte, y tal como lo muestran las cifras del cuadro 1, logró un crecimiento sostenido a partir de 2002.

A este modelo económico de crecimiento, sin embargo, le falta aún lograr mayores niveles de redistribución, uno de los temas constantes de las dos últimas campañas presidenciales (2006 y 2011). Aunque los índices de pobreza han disminuido en Perú 23,5 puntos porcentuales entre 2001 y 2010, en la sierra y en la selva se concentra el porcentaje más alto de población bajo esta condición, cifra que generalmente se encuentra por encima del promedio nacional. En 2001, el porcentaje de la población

12. Martín Tanaka: *Democracia sin partidos. Perú, 2000-2005. Los problemas de representación y las propuestas de reforma política*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2005, pp. 28-42.

Cuadro 2

Perú: porcentaje de personas en condición de pobreza por regiones naturales, 2001-2010

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Costa	39,3	40,7	37,9	35,1	34,2	28,7	22,6	21,3	19,1	17,7
Sierra	72,0	69,9	68,8	64,7	65,6	63,4	60,1	56,2	53,4	49,1
Selva	68,7	65,6	64,1	57,7	60,3	56,6	48,4	40,9	46,0	37,3

Fuente: elaboración del autor a partir de datos de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): Encuesta Nacional de Hogares Anual, 2001-2010.

Cuadro 3

Perú: porcentaje de personas en condición de pobreza e indigencia, 2000-2010

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
s./d.	54,8	s./d.	54,7	48,6	48,7	44,5	39,3	36,2	34,8	31,3

Fuente: elaboración del autor a partir de datos de Cepalstat, cit.

Cuadro 4

Perú: tasa de desempleo anual, 2000-2010

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
8,5	9,3	9,4	9,4	9,4	9,6	8,5	8,4	8,4	8,4	8,0

Fuente: elaboración del autor a partir de datos de Cepalstat, cit.

en condición de pobreza e indigencia a escala nacional era de 54,8%, mientras que en la sierra el porcentaje era de 72%; para 2010, la pobreza a escala nacional registraba 31,3%, mientras que en la sierra el porcentaje era de 49,1%¹³. La paradoja que encierra esta situación es que las zonas de la sierra peruana donde se concentran los mayores índices de pobreza son precisamente los distritos mineros, que perciben un canon por esa actividad.

Al mismo tiempo, la baja reducción del desempleo echa luz sobre el desfase entre el alto crecimiento económico

y la inclusión social pendiente y es una evidencia de la poca atención que se le otorgó al desarrollo de estructuras políticas e institucionales en comparación con la atención que recibió el desarrollo económico¹⁴.

13. Datos nacionales tomados de Cepalstat, <www.eclac.org/estadisticas/>. Datos de la sierra tomados de INEI: Encuesta Nacional de Hogares Anual, 2001-2010.

14. Cecilia Perla: «¿Empresas mineras como promotoras del desarrollo? La dimensión política de las inversiones sociales mineras en el Perú» en Carlos Meléndez y Alberto Vergara (eds.): *La iniciación de la política. El Perú político en perspectiva comparada*, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, p. 263.

En la distancia entre los bajos indicadores de desarrollo y las altas tasas de crecimiento parece haber distintos grados de responsabilidad de los niveles estatal y empresarial. Por ejemplo, la inversión social directa que ejecutan las empresas mineras es discrecional y poco regulada. En los ámbitos nacional y local, el Estado parece haber renunciado a sus funciones de regulación, recaudación y supervisión¹⁵. Por este motivo, pese a que los recursos producto de la minería han aumentado en los últimos años, ello no se traduce en una mayor capacidad de gestión de los gobiernos locales. Los ejemplos más dramáticos son Puno y Tacna, departamentos que ejecutaron menos de 30% del presupuesto asignado para 2011¹⁶.

■ El gobierno de Humala y la opinión pública

En términos generales, el gobierno de Humala ha contado con un respaldo poco estable –con tendencia al descenso– de la opinión pública. Las encuestas realizadas por Ipsos Apoyo y Datum muestran las altas y bajas de la aprobación desde que Humala asumiera la Presidencia hasta la actualidad. En la encuesta realizada en agosto de 2011 por Ipsos Apoyo, 56% de los encuestados aprobaba la conformación del gabinete ministerial y 55% creía que el Perú sería mejor en cinco años¹⁷. Las medidas propuestas para favorecer la inclusión social

fueron bien percibidas y ello se encuentra en consonancia con el discurso de campaña que le permitió a Humala ganar las elecciones presidenciales de 2011. En el gráfico 1 se muestran los índices de aprobación presidencial registrados entre agosto de 2011 y junio de 2012 de acuerdo con las encuestadoras Ipsos Apoyo y Datum.

Entre agosto y noviembre de 2011, la aprobación presidencial se mantuvo por encima de 50%, y aunque hubo momentos importantes de crisis, como el escándalo por el supuesto tráfico de influencias que involucró al segundo vicepresidente Omar Chehade¹⁸ y el aumento de los conflictos mineros, 57% de la opinión pública se mostró favorable a la consigna oficial «oro y agua», que busca hacer compatibles el crecimiento económico centrado en la minería y la redistribución social. Sin embargo, el recrudecimiento de los conflictos sociales, en particular las violentas protestas en Cañete, originadas

15. C. Perla: ob. cit., p. 265.

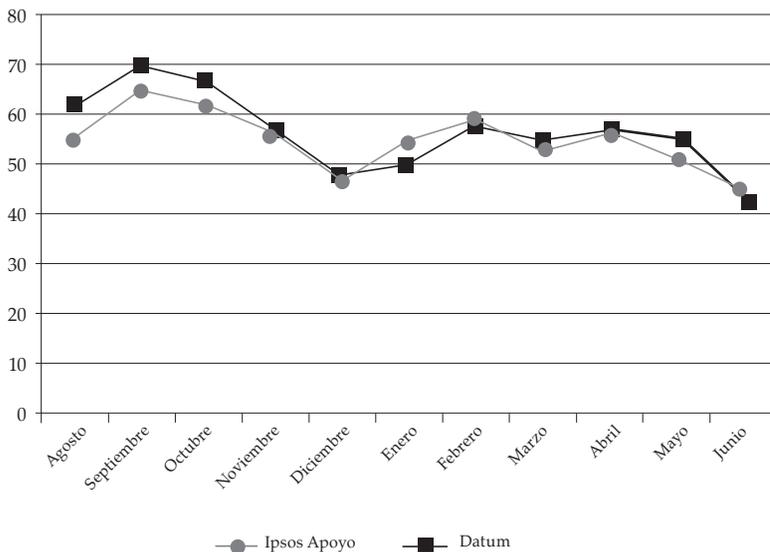
16. «Puno y Tacna son las regiones que menos gastaron durante el 2011» en *El Comercio*, 9/1/2012.

17. Ipsos Apoyo Opinión y Mercado, 15 de agosto de 2011.

18. En octubre de 2011, la Fiscalía y el Congreso iniciaron una investigación contra Chehade, luego de que se revelara que este había solicitado a tres generales la intervención policial en una localidad a favor de un grupo empresarial que mantenía una disputa por el control de una firma azucarera. Chehade renunció a su cargo en enero de 2012.

Gráfico 1

Índice de aprobación presidencial del gobierno de Ollanta Humala



Fuente: elaboración del autor a partir de datos de Ipsos Apoyo Opinión y Mercado y Datum.

en el rechazo por la ampliación del penal La Cantera, y las protestas en Cajamarca contra el proyecto minero Conga, además del manejo que el gobierno le prestó a este último, son algunos hechos que afectaron considerablemente la imagen presidencial. La encuestadora Ipsos Apoyo registró en el pasado diciembre que uno de cada cinco encuestados se oponía a la declaratoria oficial de estado de emergencia en Cajamarca y consideraba que se debían atender las demandas de los manifestantes.

Como ya se mencionó, a raíz del conflicto en Cajamarca, Humala decidió renovar el gabinete ministerial y asu-

mió la presidencia del Consejo de Ministros Valdés Dancuart, cambio que fue percibido de manera favorable por la opinión pública. Sin embargo, la aprobación presidencial, que durante los primeros meses de gestión estaba por encima de 60%, no volvió a recuperarse. En febrero se produjo la captura de Florindo Flores, alias «Artemio», último miembro de la cúpula de Sendero Luminoso durante la década de 1990, y este hecho aumentó los índices de aprobación (Ipsos Apoyo, 59%; Datum, 58%); pero en marzo se registró un nuevo descenso, con algún asomo de recuperación en abril, y un nuevo descenso en mayo (Ipsos Apoyo, 49%), como

consecuencia de los efectos de la llamada «lucha antiterrorista» adelantada por el gobierno en el valle del río Apurímac y Ene. En junio de 2012, la aprobación presidencial medida por Ipsos Apoyo llegó a su nivel más bajo, al ubicarse en 45%, en tanto que para Datum midió 43%. En la desaprobación se mezclan quienes cuestionan la represión y quienes, por el contrario, demandan mano dura frente a los conflictos sociales.

Adicionalmente, Humala cuenta con un Congreso equilibrado, compuesto por una coalición un tanto inestable integrada por 68 congresistas que suman lo obtenido por Gana Perú, la alianza a través de la cual se inscribió Humala para las elecciones presidenciales, y Perú Posible, de Alejandro Toledo, quien en ocasiones se ha distanciado del oficialismo. La oposición cuenta con 62 congresistas, que suman a los de Solidaridad Nacional de Luis Castañeda Lossio, Alianza por el Gran Cambio de Pedro Pablo Kuczynski, Fuerza 2011 que agrupa al fujimorismo y una disminuida Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), que pasó de contar con 36 congresistas a solo cuatro en la actualidad.

■ El conflicto minero en perspectiva

Los conflictos mineros registrados en años recientes en el Perú se pueden clasificar en tres tipos. El primero de ellos es aquel en el que la población se opone a la minería y sus efectos; un

segundo tipo de conflicto es aquel en el que las comunidades buscan mejorar los mecanismos de negociación con las empresas mineras; y por último, existen conflictos por la transferencia del canon minero a las respectivas regiones¹⁹. Habría que agregar que, bajo el gobierno de Humala, surgió un nuevo elemento de conflictividad social asociado a la minería: el desatado por el aumento en los controles a la minería ilegal, que ha movilizado a las poblaciones que se benefician con esta actividad.

Es importante destacar que a partir de 2007 los conflictos sociales por la minería se duplicaron en relación con años anteriores; paradójicamente, esto ha sucedido en los mismos años en que se aumentó de manera significativa el canon minero a las regiones, que casi se triplicó entre 2006 y 2007²⁰.

Para los meses de octubre a diciembre de 2011, los conflictos socioambientales estuvieron centrados en los efectos sobre los recursos hídricos, aspecto que agrupó a sectores importantes de la sociedad civil en varias regiones como Ancash, Cajamarca y Apurímac. En otras regiones se registraron también conflictos socioambientales, aunque un tanto

19. Javier Arellano Yanguas: *¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú*, IEP / PUCP / Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima, 2011, p. 142.

20. *Ibíd.*, p. 46.

más específicos, como el ocurrido en el distrito de Vincho en Ayacucho, donde el eje de la disputa fueron los efectos de la construcción de un gasoducto.

De acuerdo con los datos suministrados por el reporte de conflictos sociales realizado por la Defensoría del Pueblo, entre marzo de 2011 –durante el gobierno de Alan García– y mayo de 2012 –con diez meses de gobierno de Ollanta Humala– el promedio de conflictos sociales fue de 226. La conflictividad social se ha mantenido alta en el último año, y aunque registra algunos descensos en ciertos meses, estos conflictos vuelven a reactivarse con mayor intensidad y, a partir de noviembre de 2011, comenzaron a mostrar un aumento constante, lejos de lo que se esperarían durante un gobierno cuyo discurso político invoca la redistribución y el crecimiento con oportunidades.

En el mes de mayo de 2012, particularmente, se registraron cinco casos nuevos respecto del mes anterior. Los departamentos con mayor conflictividad fueron Ancash (28 casos), Puno (22 casos), Cajamarca (16 casos), Cusco (15 casos) y Lima provincias (15 casos). De los 245 casos de conflictividad social activos en mayo, 149 son de origen socioambiental, es decir, 60,8%²¹.

Así, el gobierno de Humala recibió un Perú movilizado y con alto grado de conflictividad social, asociada

en gran parte a la minería, actividad que ha generado el crecimiento hasta alcanzar las cifras que conocemos. Tal como hemos sostenido, la resolución de estos conflictos no es fácil, no solo porque la minería es un renglón importante de la economía peruana, sino porque la conflictividad social se expresa en la mismas regiones en las cuales el gobierno obtuvo los mejores resultados en las pasadas elecciones. Adicionalmente, muchos de los conflictos centrados en la minería tienen su origen en los gobiernos que lo precedieron.

■ ¿De la ilusión al desencanto?

El 28 de julio, día de la asunción del nuevo gobierno, Humala anunció el primer aumento del salario mínimo vital, tal como había prometido en campaña. El 1 de mayo pasado se ratificó el segundo aumento de salario, que lo llevó a los 750 nuevos soles (us\$ 282) previstos. A pesar de estas medidas, la aprobación presidencial no se vio favorecida. Por el contrario, además de un descenso en la aprobación a la gestión de Humala por parte de la opinión pública, la agenda política parece haberse corrido de las expectativas que giraban en torno de las nuevas reformas sociales hacia la lucha contra el terrorismo como una

21. A ello se suman cinco muertos a comienzos de julio en una reactivación del proyecto Conga. Defensoría del Pueblo, Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad: *Reporte de conflictos sociales* N° 99, mayo de 2012.

de las principales metas que debería alcanzar el gobierno, según una encuesta realizada por Ipsos Apoyo²².

Aunque el índice de aprobación presidencial aumentó luego de la captura de «Artemio», el secuestro realizado por Sendero Luminoso el pasado abril tuvo como efecto un nuevo descenso en las mediciones y una reedición de la desconfianza en las instituciones –81% considera que Ejército y Policía no están preparados para enfrentar el terrorismo y 41% considera que la estrategia central debe ser acabar con la corrupción dentro de las fuerzas del orden–. La renuncia de los ministros de Defensa y del Interior –cuestionados por la forma en que manejaron los hechos que rodearon el secuestro–, al igual que la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de varios miembros

del gabinete ante las protestas en Cajamarca por el proyecto minas Conga, muestran un constante cambio de ministros ante cada coyuntura crítica, y esto sugiere un manejo improvisado antes que visiones estratégicas de gobierno.

El objetivo del gobierno de Humala es mantener el crecimiento sostenido y lograr una mayor inclusión social, metas que requieren la superación de importantes problemas estructurales en el nivel estatal nacional y subnacional, frente a un sistema político aún en recuperación democrática y con una movilización social creciente que busca mayores niveles de inclusión. Todavía es temprano para un dictamen definitivo, pero el escenario no será sencillo. ☐

22. *El Comercio*, 20/5/2012.

Ecuador Debate

Abril de 2012

Quito, Ecuador

Nº 85

COYUNTURA: Diálogo sobre la coyuntura: Protesta social y reactivación de la oposición política. Conflictividad socio-política: noviembre 2011- febrero 2012. TEMA CENTRAL: El reino (de lo) imaginario: Los intelectuales políticos ecuatorianos en la construcción de la Constitución de 2008. Los intelectuales en su laberinto (la ilusión de lo político). Gramsci y los intelectuales. La desvinculación social y el intelectual disidente. Intelectuales indígenas ecuatorianos: tensiones y desafíos ante el sistema educativo formal. Gobernabilidad y autonomía. Dos cuestiones claves para el estudio de los profesionales y expertos. DEBATE AGRARIO-RURAL: Comunidades y territorio en la Costa del Ecuador. ANÁLISIS: Condición laboral y proyecciones culturales en San Andrés, Cantón Guano. La derrota de las organizaciones socialistas en México (Estado de Hidalgo) 1917-1942. RESEÑAS.

Ecuador Debate es una publicación del Centro Andino de Acción Popular. Redacción: Diego de Utreras 733 y Selva Alegre, Apartado aéreo 17-15-173-B, Quito, Ecuador, Tel.: 2 522763. Correo electrónico: <caap1@caap.org.ec>.